



MOVILIZACIONES CAMPESINAS, POLÍTICA PÚBLICA Y TRANSICIONES HACIA LA AGROECOLOGÍA EN COLOMBIA, 1990-2018†

[PEASANT MOBILIZATIONS, PUBLIC POLICY AND THE TRANSITIONS TO AGROECOLOGY IN COLOMBIA, 1990-2018]

Julián Augusto Vivas-García and Álvaro Acevedo-Osorio

Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Colombia. Ciudad Universitaria. Edificio 500. Código Postal UN.11001, Bogotá, Colombia. Emails: javivasg@unal.edu.co, aacevedoo@unal.edu.co

*Corresponding author

SUMMARY

Background: In recent years, especially since the beginning of the Peace Process between the Colombian government and the FARC (Revolutionary Armed Forces of Colombia) guerrillas, an increase in peasant, indigenous and Afro-descendant mobilizations throughout the territory has become visible. Within this context, the place that agroecology has begun to occupy as an important element of the different repertoires of popular mobilization deserves to be analyzed. **Objective:** To analyze the nature of the relationship between peasant mobilizations and agroecology in a critical period in the country's history in which rural communities have had to face the economic, environmental and political crisis generated by the agrarian development model. that is imposed within a context of violence to help understand the possibilities that agroecology brings with it in the construction of technical, economic, political and cultural alternatives to the dominant political regime in Colombia. **Hypothesis:** Agroecology is rooted in the environmental, economic and sociocultural logic of traditional Colombian communities, where it reappears today as a practice and a living discourse to maintain and strengthen their historical ways of life. **Methodology:** the study is based on primary, spatial, quantitative and qualitative information that allows identifying the place that the country's peasants have given to agroecology within their discourses in the search for a dignified life, and therefore for a decent agriculture. and a fairer society. **Results:** The incipient formation of a social mobilization in favor of agroecology in Colombia that, in coordination with other actors from the academy, NGOs, and even State institutions, is configured with the purpose of transforming the historical obstacles for the positioning of agroecology in the different territories. **Implications:** The approaches of agroecology offer peasant organizations an ideological and discursive platform that maintains identity with the different types of struggles that peasants must undertake in defense of their territories. **Conclusions:** There is an unprecedented and diverse social process in Colombia in which agroecology begins to position itself on the public agenda hand in hand with a series of public policy proposals that are built through the various peasant mobilizations.

Keywords: agroecology; peasant movement; public policy; social movements; Colombia.

RESUMEN

Antecedentes: En los últimos años, especialmente desde el inicio del Proceso de Paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), se hace visible un aumento de las movilizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes en todo el territorio nacional. Dentro de este contexto, merece ser analizado el lugar que la agroecología ha empezado a ocupar como un elemento importante de los diferentes repertorios de la movilización popular. **Objetivo:** Analizar la naturaleza de la relación entre las movilizaciones campesinas y la agroecología en un periodo álgido de la historia del país en el que las comunidades rurales han tenido que hacer frente a la crisis económica, ambiental y política generada por el modelo de desarrollo agrario que se impone dentro de un contexto de violencia para ayudar a comprender las posibilidades que trae consigo la agroecología en la construcción de alternativas técnicas, económicas, políticas y culturales al régimen político dominante en Colombia. **Hipótesis:** la agroecología se arraiga en las lógicas ambientales, económicas y socioculturales de las comunidades tradicionales colombianas, donde ésta resurge hoy como una práctica y un discurso vivo para mantener y fortalecer sus formas históricas de vida. **Metodología:** el estudio se basa en información primaria, espacial, cuantitativa y cualitativa que permite identificar el lugar que los campesinos y campesinas del país han dado a la agroecología dentro

† Submitted March 22, 2022 – Accepted October 5, 2022. <http://doi.org/10.56369/tsaes.4291>



Copyright © the authors. Work licensed under a CC-BY 4.0 License. <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

ISSN: 1870-0462.

ORCID: J.A. Vivas-García <http://orcid.org/0000-0002-4425-119X>; A. Acevedo Osorio <http://orcid.org/0000-0003-2132-4891>

de sus discursos en la búsqueda de una vida digna, y por tanto por una agricultura y una sociedad más justa. **Resultados:** La incipiente formación de una movilización social a favor de la agroecología en Colombia que, en articulación con otros actores de la academia, las ONG, e incluso de las instituciones del Estado, se configura con el propósito de transformar los históricos obstáculos para el posicionamiento de la agroecología en los distintos territorios.

Implicaciones: Los planteamientos de la agroecología ofrecen a las organizaciones campesinas una plataforma ideológica y discursiva que mantiene identidad con los diferentes tipos de luchas que campesinos y campesinas deben emprender en la defensa de sus territorios. **Conclusiones:** Existe en Colombia un proceso social inédito y diverso en el que la agroecología empieza a posicionarse en la agenda pública de la mano de una serie de propuestas de política pública que son construidas a través de las diversas movilizaciones campesinas.

Palabras clave: agroecología; movimiento campesino; política pública; movimientos sociales; Colombia.

INTRODUCCIÓN

El tiempo durante el cual la agroecología ha sido desarrollada y defendida por diferentes grupos sociales -con ese y otros nombres- es mucho más amplio que el periodo relativamente reciente en el que se posiciona la categoría agroecología en los debates públicos con un contenido académico, científico, y por tanto político (Giraldo y McCune, 2019; González de Molina y Sevilla Guzmán, 1993; Wezel *et al.*, 2009).

Sin embargo, entre las décadas de los años 70 y 80 del siglo XX, el movimiento agroecológico irrumpe en diferentes partes del mundo marcado por los reclamos frente a los efectos de la industrialización de la agricultura sobre el medio ambiente y el campesinado (Wezel *et al.*, 2009). Influenciado por el movimiento ambientalista, paulatinamente se consolida en este periodo un movimiento de composición heterogénea que, no obstante, se identifica con las críticas de Rachel Carson sobre la problemática ambiental asociada al uso de pesticidas de síntesis química (1964) o las de D. Pimentel y M. Pimentel (1979) sobre el uso ineficiente de la energía en la agricultura (Sevilla Guzmán y Mielgo, 1994).

En las décadas siguientes, la agroecología fue ampliando sus perspectivas gracias a su consolidación como un enfoque analítico que incorpora una crítica al sistema agroalimentario corporativo sobre la base de una óptica sistémica, interdisciplinaria y participativa. También ha sido importante, tal como argumentan Altieri y Toledo (2010), el reconocimiento de la importancia de los saberes locales y tradicionales, arraigados milenariamente en diferentes grupos sociales, en la construcción de sistemas socio-ecológicos complejos y contextuales, que se convierten también en objetos de estudio de la agroecología como ciencia.

Este último aspecto ha implicado que el conocimiento agroecológico tradicional o local no deba entenderse solamente como un saber instrumental, climático, entomológico, botánico, edafológico o agronómico, pues el carácter sistémico de su proceso de construcción lo pone en relación con otros contextos económicos, culturales y políticos que le permiten elaborar conceptualizaciones sobre modelos políticos y económicos alternativos (Calle Collado *et al.*, 2013).

De igual forma, el contenido político del conocimiento campesino ha sido visibilizado desde hace algunas décadas por el campo académico de la historia cultural a través del estudio de las grandes rebeliones campesinas, y de la forma cómo, al lado de éstas, subsisten otras formas de resistencia más anónimas y silenciosas que transcurren dentro de las prácticas cotidianas del campesino (Scott y Martínez, 1997).

Por estas razones, una gran cantidad de autores coincide en señalar que el proceso de consolidación de la agroecología se produce gracias a la estrecha relación con los movimientos sociales involucrados en la construcción de alternativas técnicas, económicas, políticas y culturales al régimen dominante (Petersen, 2020; Gliessman, 2017).

En el contexto latinoamericano actual de enormes injusticias sociales, económicas y políticas debe entenderse entonces que estas construcciones de los movimientos sociales por la agroecología trascienden su exclusiva oposición a los efectos ambientales del proceso de industrialización de la agricultura para ubicarse en el campo más amplio de las relaciones de poder implícitas en el modelo de desarrollo que desencadena tales inequidades. Los repertorios agroecológicos rebasan entonces lo estrictamente ecosistémico y se insertan dentro de las luchas por la justicia surgidas de las tensiones entre capital y trabajo, y los desajustes del proceso de modernización que propone el funcionalismo sociológico (Archila, 2003). De la misma manera, las luchas por la agroecología rebasan los marcos sectoriales de la política agraria, para aliarse con otras luchas como las políticas de salud, la educación, la protección social y los servicios públicos, por ejemplo.

Se propone comprender las luchas por la agroecología como procesos colectivos que articulan las diferentes dimensiones sociales económicas, ambientales, políticas y culturales por la justicia en territorios específicos. Es en las condiciones históricas del ámbito territorial en donde se explica la identidad específica de las demandas por la agroecología a través de la mutua determinación de los procesos naturales y sociales más allá del antropocentrismo y el carácter contextual que se le suele dar a las condiciones

ecológicas dentro de los procesos sociales (Toledo y González de Molina, 2007)

Como lo afirman Montañés y Delgado (1998), toda relación social tiene ocurrencia en el territorio y se expresa como territorialidad. El territorio es, de esta manera, el escenario de las relaciones sociales en donde se evidencia la naturaleza compleja y heterogénea de la “conciencia agroecológica campesina” de la que hablan (González de Molina y Sevilla Guzmán, 1993). De manera que para que los flujos económicos sean apropiados en los mismos territorios en donde se producen, a través de instituciones económicas o políticas que promueven la gobernanza de los bienes comunes, la regulación del mercado, o la revalorización de las relaciones de cooperación y reciprocidad presentes en las sociedades rurales, los campesinos construyen demandas precisas, de carácter ambiental, económico, o cultural, y negocian, se adaptan, resisten, transforman o concertan las condiciones en las que surgen los conflictos y las demandas (Archila, 2003).

El presente artículo tiene como objetivo identificar la relación entre la agroecología y las diferentes formas de movilización campesina en Colombia durante el periodo 1990 y 2018, y la manera como este proceso de adopción de la agroecología en los repertorios campesinos viene aparejado a una serie de propuestas para la transformación rural del país. Para esto se centra, desde una perspectiva histórica, en el análisis de las propuestas de política pública para un tránsito a la agroecología que se expresan a través de protestas, mandatos, congresos, así como otras formas de participación e incidencia política del campesinado colombiano. De manera que las pretensiones de este escrito evaden el análisis de las lógicas y dinámicas de la acción social colectiva y se centran más bien en el proceso de construcción de alternativas económicas y políticas que hace el campesinado en el mismo periodo en el que las comunidades rurales deben afrontar los efectos económicos, ambientales y políticos de las transformaciones del modelo de desarrollo agrario desde comienzos de la década de 1990 hacia el neoliberalismo.

Las actuales metáforas del Estado como un centro imaginado y como una red de actores que se refuerzan con otros cambios como los derivados de la amplia difusión y aplicación de los principios de gobiernos abierto, el auge de las redes sociales, la crisis de los partidos políticos como mecanismos de representación, no solo cuestionan los principios republicanos tradicionales de la democracia parlamentaria (Oszlak, 2018; Roth, 2013), sino que colocan a los movimientos sociales como el protagonista en el tránsito hacia la agroecología. Este tránsito se viene dando con el actual proceso de construcción participativa de políticas públicas para la

agroecología en Colombia y América Latina, en el que las propuestas del movimiento social juegan un papel fundamental.

METODOLOGÍA

La indagación sobre los repertorios de la movilización campesina y su relación con la agroecología adopta varias rutas metodológicas en este estudio. En primer lugar, se recurre a la investigación historiográfica para analizar el movimiento campesino y las experiencias de transición agroecológica documentadas en una amplia bibliografía de carácter local y regional.

Un lugar más importante en el análisis lo ocupa el procesamiento de la base de datos de luchas sociales del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP/Programa por la Paz). Esta base recopila información histórica sobre las movilizaciones sociales protagonizadas por pobladores urbanos, campesinos, indígenas, estudiantes, mujeres, entre otros actores sociales que se consideran claves en el proceso de transición agroecológica a partir de la revisión bibliográfica realizada. Esta base permitió identificar patrones espaciales, temáticas recurrentes y propuestas en las movilizaciones campesinas, incluyendo también indígenas y afrodescendientes recientes. El análisis de estos elementos, en el marco de la bibliografía sobre el movimiento campesino, permitió caracterizar las luchas por la agroecología a partir de sus ricas propuestas en materia de política pública.

Para analizar las propuestas que se encuentran implícitas en la movilización campesina, la información contenida en la base de datos sobre movilizaciones sociales se agrupa en tres categorías de acuerdo al criterio de afinidad en sus principales motivaciones, así:

Demandas por la *política agraria*, además del acceso al crédito, los servicios de riego, comercialización, investigación o asistencia técnica, incluye también las protestas relacionadas con territorios étnicos, predios rurales y vivienda rural, así como el incumplimiento o violación de acuerdos entre el Estado y las organizaciones campesinas. Las protestas causadas por el proceso de apertura e internacionalización del sistema agroalimentario también se incluyen bajo este rótulo.

Los *motivos ambientales*, hacen referencia al manejo, uso o explotación de recursos naturales en las diferentes regiones del país.

Bajo el rótulo de *derechos económicos y sociales* se agrupan las protestas campesinas que exigen el cumplimiento de derechos a la vida, a la integridad, a la libertad y a la paz, así como a las condiciones

económicas básicas para una vida digna, salud, educación, alimentación, y vivienda. También se agrupan las protestas por violaciones al Derecho Internacional Humanitario, por falta de infraestructura o por obstáculos para el ejercicio de los derechos civiles y políticos que afectan a una buena parte de la población campesina y especialmente a las mujeres.

Para completar el análisis de la base de datos y poner de relieve el carácter territorial de las propuestas agroecológicas resultó de gran importancia el análisis espacial que acompaña la indagación de las luchas campesinas por la agroecología en el periodo 1990-2018.

Otra ruta metodológica que permite un acercamiento a las propuestas campesinas para la transición a la agroecología es la sistematización de las memorias de los ocho talleres regionales promovidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), la Red Nacional de Agricultura Familiar, con el apoyo de Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ) y Fundación Suiza de Cooperación al Desarrollo (Swissaid). Los talleres, realizados a lo largo del año 2018, tuvieron el objetivo de construir participativamente los lineamientos para una Política Pública en Agroecología con la participación de más de 100 representantes de organizaciones sociales articuladas a la (Red Nacional de Agricultura Familiar) RENAFA, técnicos, académicos y otras personas interesadas en la agroecología de cada región del país, alrededor de la producción, el conocimiento, el uso y conservación de los recursos naturales, la distribución y el consumo, así como los procesos sociales de incidencia política.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las movilizaciones campesinas por el territorio y la agroecología (1990-2018)

En la complejidad de la historia colombiana reciente, la consolidación de la agroecología como una disciplina científica, que se da con mayor claridad a lo largo de los años noventa (Sicard *et al.*, 2017), parece darse de forma simultánea a un proceso de recomposición del movimientos campesino, de la mayor intensificación de la movilización social, y del cambio en los referentes de lucha de las organizaciones campesinas (Archila, 2003; Rincón García, 2001).

En efecto, después de las movilizaciones campesinas que rodearon la expedición de la ley 30 de 1988 se presenta un rápido declive y un posterior repunte de la protesta social que se da en medio de un auge del movimiento cívico y el mayor protagonismo de las

movilizaciones campesinas sobre las de los sectores urbanos asalariados (Archila, 2003).

En términos generales, las más de 960 movilizaciones campesinas, tomas, éxodos, marchas, paros, o bloqueos de vías que se dan entre 1990 y 2016 (Figura 1) van a estar relacionadas con las enormes brechas sociales y políticas urbanas-rurales, los efectos económicos y ambientales del modelo del desarrollo, el conflicto armado, el debilitamiento del Estado y la incapacidad, tanto de este como de los partidos políticos con sus redes locales clientelares, para integrar las demandas de los grupos sociales marginados dentro del modelo de desarrollo (Archila, 2003).

Para examinar las reivindicaciones por la agroecología y el territorio dividimos el periodo estudiado en tres momentos que tienen gran significancia para el campesinado. El análisis inicia en 1990 cuando se empiezan a producir las principales reformas económicas del proceso aperturista, y culmina con la convergencia del movimiento campesino en la construcción del mandato agrario de 2002, una apuesta amplia de política pública alternativa en la que tiene un lugar importante la agroecología. En la siguiente década se diversifica el repertorio y se intensifican sustancialmente las diferentes formas de lucha en un contexto de fuerte represión contra el movimiento social. En este proceso de movilización social se da un quiebre durante el paro agrario de 2013 y las negociaciones de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC.

En el siguiente gráfico se aprecia el comportamiento de los repertorios de la movilización campesina, según los motivos de la movilización mencionadas anteriormente. Cada uno de estos motivos se analiza de manera transversal en los diferentes periodos señalados.

1990-2001

Como se mencionó anteriormente, la expedición de la ley 30 de 1988 produjo una importante coyuntura de movilización campesina. Esta coyuntura contrasta con la tendencia decreciente de las luchas sociales explicada por el contexto de violencia de la década de los años ochenta que tuvo como principal eje el proceso de exterminio de la Unión Patriótica, partido político derivado de los acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC a mediados de los años ochenta, y cuyas bases sociales se encontraban principalmente en las zonas rurales de colonización reciente del país (CNMH, 2014).

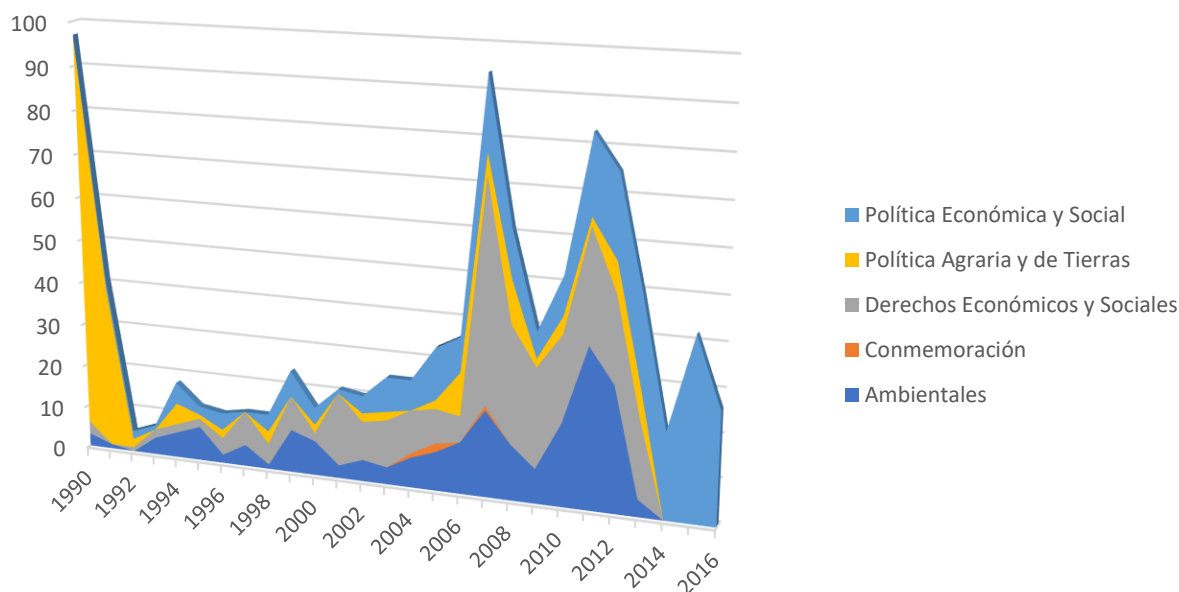


Figura 1. Movilizaciones campesinas según motivación principal (1990-2016). Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la base de datos de luchas sociales del CINEP/Programa por la Paz.

Sin embargo, a pesar del clima de terror creado por la acción conjunta de las fuerzas del Estado y el paramilitarismo en las regiones con mayor tradición organizativa, el contexto de negociación con varios grupos armados y el preámbulo de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 motivaron a las organizaciones sociales con mayor capacidad de movilización a presionar al gobierno para crear espacios de diálogo que llevaran a resolver los reclamos de las poblaciones rurales, incluyendo el histórico problema de la tierra (Fajardo, 2012).

Perceptiblemente, el rechazo a las políticas económicas oficiales de liberalización y desmonte del sector público agropecuario constituye una de las principales motivaciones de la movilización campesina durante de la primera mitad de 1990. Solo entre finales de 1994 y comienzos de 1996 se presentaron, entre éxodos y marchas 73 movilizaciones de inconformidad campesina, especialmente protagonizadas por pequeños y medianos productores (Bautista, 2012; Rincón García, 2001). Sin embargo, su importancia trasciende, pues en medio de los efectos de la crisis generada por las reformas económicas y sociales surgen innumerables alternativas locales económicas y educativas para un desarrollo rural diferente al propuesto por las políticas oficiales.

En el ámbito local este rechazo va a tener múltiples expresiones: marchas contra la crisis energética, y los sucesivos proyectos de reforma tributaria, contra la privatización o el alza de los precios de los servicios públicos, contra el deterioro de las economías locales,

la quiebra de agricultores y trabajadores informales o su desalojo del espacio público, etc. Es en las ciudades principales en donde el repertorio de la movilización social va a expresar directamente el rechazo a los efectos de las políticas de liberalización sobre la agricultura o la incidencia de estas sobre la seguridad alimentaria y el autoabastecimiento del país.

Así, por ejemplo, en el norte del Tolima se presenta a mediados de 1995 una importante movilización cafetera que sería referente histórico para otras organizaciones de los departamentos de Huila, Valle y Antioquia, así como para los campesinos organizados del Tolima, especialmente de la Asociación de Medianos y Pequeños Agricultores (Asopema), del Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Tolima (Sintragritol), de la Asociación de Trabajadores Agrícolas del Tolima (Astracatol), o la Asociación Ambientalista con Desarrollo al Futuro (Asohermosas) (Bautista, 2012).

En estas regiones cafeteras, el deterioro de la economía local produjo desde finales de la década de 1980 la cesación de pagos de créditos adquiridos por los caficultores en años anteriores y las consecuentes acciones de embargo y asedio constante por parte de los bancos. Esto condujo a su vez a una serie de movilizaciones campesinas durante la primera mitad de la década de 1990 que fueron totalmente desatendidas por los gobiernos locales. Sin embargo, la contundencia del paro cafetero de 1995 obligó a una respuesta parcial del gobierno nacional a través de compromisos oficiales sobre auxilios para el control de

la broca (*Hypothenemus hampei*), la condonación de deudas para pequeños productores, incentivos para la producción y proyectos productivos. Aunque la mayoría de los compromisos fueron incumplidos, del paro surgió una importante dinámica organizativa local que se apoyó en diferentes líderes veredales; surgió también una etapa de consolidación organizativa y, en el caso de Asopema, un proceso de formación de las bases que permitiría la creación de las escuelas itinerantes con un enfoque agroecológico (Bautista, 2012)

En la década siguiente esta experiencia daría lugar a otros espacios de formación con enfoque agroecológico como la Escuela Nacional de Dirigentes Sociales, la Escuela Agroalimentaria del año 2000, o el Sistema Único Nacional de Formación del Coordinador Nacional Agrario, con un claro interés por la seguridad alimentaria y las economías propias (Congreso de los Pueblos, 2015).

Dentro de las alternativas locales que surgen como respuesta a las amenazas sobre la agricultura familiar en el contexto de liberalización también se puede mencionar por ejemplo a la Asociación de Pescadores, Campesinos, Indígenas y Afrodescendientes para el Desarrollo Comunitario de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú (ASPROCIG) y al Distrito Agrario del Oriente Antioqueño.

ASPROCIG agrupa a 96 organizaciones de base (6200 familias) que trabajan en defensa del papel que cumple la agricultura familiar en el proceso de adaptación al cambio climático, el fomento de agroecosistemas biodiversos, el comercio justo y la educación a través de la red de escuelas agroecológicas (Álvarez, 2016). Por su parte, el Distrito Agrario nace en 1994 en Marinilla, Antioquia, como un mecanismo para la planificación participativa del territorio que permitiera la protección de la agricultura familiar campesina a través de la producción agroecológica, los mercados justos, la promoción de la soberanía alimentaria y el bienestar de la población. Mediante el Acuerdo Municipal 35 de 2005 la organización logra el establecimiento de la Cátedra Agroecológica para los estudiantes de 4o y 5o de básica primaria de las instituciones y/o centros educativos del sector rural; y con la ordenanza No. 44 de 2014 se conforman, reestructuran e institucionalizan los Distritos Agrarios Supramunicipales (Álvarez, 2016).

En el periodo 1990-2001 las demandas campesinas de las regiones Andina y Caribe y así como del pie de monte llanero se centraron en la política agraria y de tierras como una respuesta a los términos del discurso oficial en el que se producen las reformas del modelo de desarrollo en la década de los años noventa (Figura 2). Sin embargo, en el sur de la región Andina se produce en este mismo periodo un claro movimiento por la defensa del derecho a la vida, a la integridad, a

la libertad y a la paz en medio de la agudización de la violencia armada en todo el país. Mientras tanto, en las principales capitales del país son visibles las movilizaciones por demandas ambientales junto a la exigencia de los derechos económicos y sociales.

Las demandas por la política agraria, dentro de las cuales las movilizaciones por la tierra ocupan un lugar central durante la década 1990, también han sido importantes para incubar propuestas para la agroecología. Con tomas de tierras o de las oficinas regionales del INCORA, los campesinos e indígenas de la Costa Atlántica y la Región Andina, especialmente en los departamentos de Cauca, Antioquia y Risaralda protagonizaron durante los primeros años de la década una fuerte movilización por la tierra.

Entre los años 1990-92 fueron especialmente intensas las tomas de tierras por parte de campesinos de los municipios de la región de Montes de María, Valledupar, Urabá Antioqueño y el sur del departamento del César, en la región del Magdalena Medio. También en este periodo se presentaron tomas de tierras significativas (más de 11) en los municipios de Yopal y Aguazul, en la región del piedemonte llanero. En estas mismas regiones se desataría posteriormente una violencia sistemática contra los movimientos sociales cuando, de la mano de la expansión de ejércitos paramilitares y la mayor presencia de los recursos del narcotráfico en la compra y despojo de tierras, se produce una rápida expansión de monocultivos como el de la palma aceitera (CNMH, 2014).

En medio de esta violencia se encuentran experiencias de tomas de tierras que derivan posteriormente en un tránsito hacia la agroecología. Este es el caso, por ejemplo de las Comunidades Indígenas del Resguardo de San Andrés de Sotavento (Sucre), quienes recuperan desde la década de los años ochenta y hasta 1997 cerca de 91 fincas (RECAR, 2007). Este proceso tiene lugar en los departamentos de Sucre y Córdoba a lo largo de 83000 hectáreas, de las cuales 14000 son de propiedad comunitaria, con una unidad familiar de 1.9 a 2.6 hectáreas. Dentro del mismo se han destacado el proceso organizativo que se concreta en la creación de la Asociación de productores agropecuarios alternativos (ASPROAL) y la Red Agroecológica del Caribe (RECAR), asociaciones que han fomentado la implementación de la agroecología mediante mercados agroecológicos, sistemas participativos de garantías (SPG) y una casa de semillas que hace parte importante de la lucha por la diversidad, ya que allí se han logrado conservar 27 variedades de maíz, 12 de ñame, 14 de yuca entre otros. Esto ha sido posible mediante la implementación de múltiples prácticas tales como los huertos caseros mixtos, el asocio entre cultivos semestrales y anuales, el uso de potreros arborizados, etc. (Álvarez, 2016).

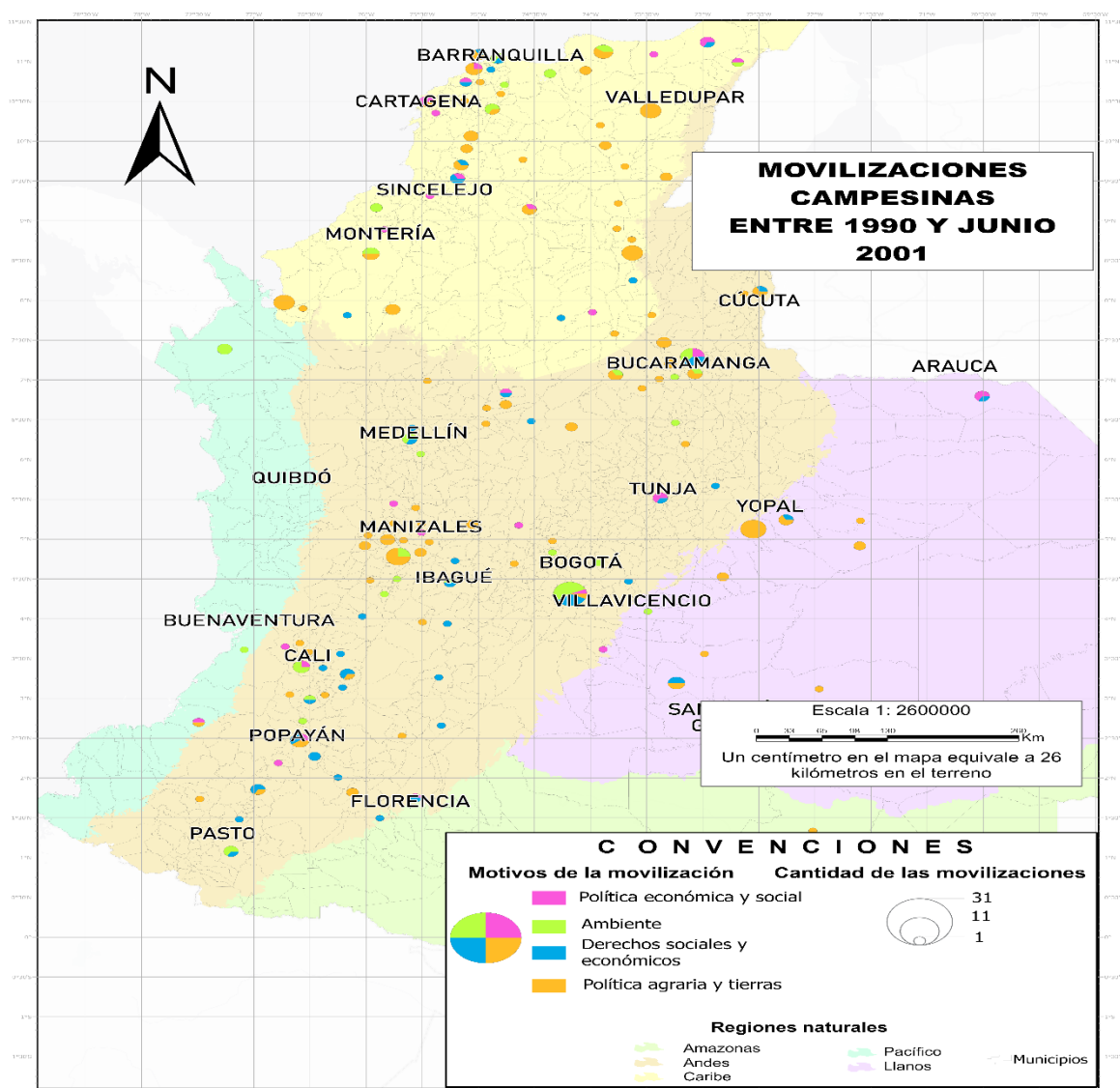


Figura 2. Movilizaciones campesinas entre 1990 y 2001. Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la base de datos de luchas sociales del CINEP/Programa por la Paz.

Una dinámica similar se encuentra en las escuelas y mercados agroecológicos que surgen en los municipios de Calarcá y Córdoba (Quindío) gracias a la movilización de 153 familias que en 1996 logran que el INCORA les entregue cerca de 4.8 hectáreas a cada una. A partir de allí tiene lugar un proceso organizativo que da lugar a la creación, en 1999, de la Corporación Regional Agroecológica (CORA). La Corporación, con el apoyo de la Universidad Tecnológica de Pereira y la Corporación Universitaria Santa Rosa de Cabal (UNISARC) profundiza desde entonces en la transición agroecológica a través de los mercados, las tiendas agroecológicas, los custodios de semillas y la conformación de los sistemas participativos de garantía (Álvarez, 2016).

Dentro de las demandas relacionadas con los derechos económicos y sociales ocupa un lugar principal la experiencia de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC). Desde mediados de la década de 1980 las comunidades campesinas del bajo y medio Caguán reclamaron del gobierno una solución a los problemas sociales, económicos y ambientales derivados del proceso de colonización en esta región del país. Esto implicó un programa de ordenamiento ambiental territorial para el desarrollo regional que constituyó una experiencia pionera para los posteriores procesos de delimitación del Área de Manejo Especial de La Macarena (Decreto 1989 de 1989) y de los programas de estabilización de la población colona ubicada de la Amazonia con los que se buscaba hacer frente al avance del cultivo de coca sobre áreas de reserva

forestal (Salcedo *et al.*, 2013; Ortiz, Pérez, Castillo y Muñoz, 2004).

En su conjunto, estas experiencias y reclamos campesinos configuraron a la postre un modelo de ocupación territorial que involucraba aspectos como la conservación de ecosistemas frágiles, la sustentabilidad de las actividades agrícolas y pecuarias, así como la sustracción y titulación de territorios. Importantes académicos como Darío Fajardo, Abdón Cortés o Alfredo Molano, se encargaron de agenciar este modelo para que, como ya se mencionó, en 1994 fuera incluida la figura de las ZRC en el articulado de la ley 160 (Ortiz Guerrero *et al.*, 2004).

Simultáneamente, en las áreas de producción y procesamiento de hoja de coca (*Erythroxylum coca*) la depresión de los precios de la droga que se presentó a nivel internacional a mediados de los noventa llevó a los campesinos, cultivadores y no cultivadores de la hoja, cosecheros y comerciantes a movilizarse en 1996 para pedir al gobierno medidas que resolvieran los problemas generados por la carencia de inversión social en estas áreas de frontera agraria (Fajardo, 2012).

Esta movilización campesina logra presionar por la reglamentación de los artículos que creaban las ZRC y el inicio de un proyecto piloto financiado en 1998 por el Banco Mundial para las regiones de El Pato-Balsillas (Caquetá), El Retorno-Calamar- San José del Guaviare y Cabrera (Cundinamarca).

De manera que las ZRC nacen signadas por las históricas reivindicaciones campesinas, pero trascienden lo estrictamente productivo para responder a problemas de tipo ambiental, social, económico y generar una relación sostenible entre la agricultura y la fragilidad de los ecosistemas en donde éstas se ubican.

Esto se concreta en una serie de estrategias de planificación como los Planes de Desarrollo Sostenible, la Evaluación Social y Ambiental Participativa (ESAP), los Planes de Ordenamiento Ambiental del Territorio (POAT) y las estrategias ambientales y productivas del territorio (PMAP), las cuales se van constituyendo no solo en herramientas de planificación (Ortiz Guerrero *et al.*, 2004) sino también en prometedores instrumentos de transición hacia la agroecología en estas regiones (Acevedo- Osorio y Chohan, 2020).

El Plan de Desarrollo Sostenible de las ZRC, por ejemplo, se establece como una herramienta básica de planeación con la que las comunidades, autoridades, y entidades vinculadas construyen caminos para transformar las prácticas agrícolas de estas regiones del país. Así, después de un proceso de construcción

de consensos en los encuentros promovidos por la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC) en 2013 se llevó a cabo la primera Escuela Nacional Agroecológica organizada por la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina con el apoyo del INCODER y la FAO (Prensa Rural, 2013).

En esta escuela ha sido fundamental la metodología de campesino a campesino y el diagnóstico de finca, así como la formulación de un plan de acción para el mejoramiento de parcelas, complementadas además por el Intercambio de semillas y saberes de diferentes regiones del país. Allí se creó también la Red Campesina Agroecológica en donde se enlazan diferentes organizaciones campesinas y se busca dinamizar la transición hacia la agroecología en diferentes regiones “como una forma decidida y definitiva de afrontar la crisis del campesinado colombiano y de proponerle al país en su conjunto la validación desde la práctica y la implementación de modelos productivos sustentables, equitativos y eficientes, de cara a un verdadero proceso de construcción de la soberanía alimentaria nacional” (Prensa Rural, 2013. Pág. 1).

Por otro lado, en todo el país las protestas por el agua fueron protagonistas de las demandas campesinas relacionadas con el medio ambiente.

Las marchas por las altas tarifas de servicios públicos o la falta de servicio de saneamiento básico, los actos cívicos o litúrgicos para reclamar de las autoridades locales acciones sobre la contaminación de ríos o caños, y la oposición a la construcción de obras que ponen en peligro los nacimientos de quebradas fueron diferentes expresiones del importante papel que juega el agua en la transición hacia la agroecología.

Esta movilización por el agua abarca un espectro amplio de dimensiones. Desde las económicas, como en el caso del paro de pescadores de El Llanito (Barrancabermeja) que en 1990 presionan a las entidades públicas locales para que atiendan los problemas económicos de la pesca derivados de la calidad del agua de la Ciénaga de San Silvestre, hasta las relacionadas con la salud pública, falta de acueductos o atención por deslizamientos provocados por las fuertes lluvias que se presentan como consecuencia del fenómeno del niño, visible desde los primeros años de la década.

Todos estos momentos de la movilización fueron antecedentes de una importante confluencia de más de 1200 organizaciones sociales del país que a finales de la primera década de los años 2000 propusieron el referendo por el agua, un proceso de reforma constitucional que buscó el reconocimiento del acceso al agua potable como un derecho humano fundamental, así como la garantía de un mínimo vital gratuito, la

conservación de las cuencas productoras de agua y el fortalecimiento de la gestión pública estatal y comunitaria de la misma.

En este conjunto de protestas las conmemoraciones y actos simbólicos van a jugar un papel fundamental pues las marchas de colegios o carnavales con los que se buscaba celebrar, por ejemplo, el día del agua o del árbol, no solo reclamaban el cuidado de ríos, o se oponían a tala de árboles y los vertimientos de basuras, sino que participan en la construcción de una conciencia colectiva sobre la complejidad del medio ambiente.

2002-2013

En el periodo 2002-2013 se intensifican las formas de protesta y se diversifican los repertorios de la movilización campesina. Así, más del 60% del total de las movilizaciones que se presentan en el periodo 1990-2016 ocurren entre los años 2002- 2013. Mientras la política agraria pasa a un lugar marginal, adquieren protagonismo la lucha por las mejores condiciones de vida relacionadas con las políticas de salud, educación, protección social y servicios públicos, lo mismo que las demandas ambientales (Figura 3).

La incipiente visibilización de las víctimas del conflicto armado dentro de la institucionalidad permitió reafirmar la asociación entre el creciente despojo de tierras y la rápida expansión de actividades agroindustriales, intereses económicos particulares, realización de megaproyectos (CNRR, 2009), y en últimas con el modelo de desarrollo rural que surge durante las reformas socioeconómicas de comienzos de los años noventa y que se refuerza en el contexto militarista del gobierno Uribe.

En resistencia a este contexto de violencia, un momento crucial para este proceso de construcción de propuestas agroecológicas dentro del movimiento campesino sería la aprobación unánime del Mandato Agrario en el Congreso Nacional Agrario de 2003. El Congreso fue producto de un proceso de confluencia de organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, que buscaba construir a través del mandato una propuesta de política pública para el campo (Valencia, 2010; Salcedo *et al.*, 2013).

En voz de uno de sus protagonistas, la construcción colectiva del mandato es “Sin duda uno de los grandes momentos del campesinado colombiano porque nos pusimos de acuerdo en la posibilidad de construir una

propuesta dirigida a la sociedad colombiana, las instituciones gubernamentales y a la opinión de la comunidad internacional” (Valencia, 2010).

El mandato consta de catorce puntos. En primer lugar, aparece el derecho a la vida, a plenas libertades democráticas y el respeto a los derechos humanos, complementada por una serie de puntos que abordan la necesidad de reconstruir el Estado social de derecho en Colombia. En el segundo punto la seguridad y soberanía alimentaria se establecen como un derecho ligado a la autodeterminación cultural y económica de campesinos e indígenas. Aparecen además los procesos productivos orgánicos, la transformación de materias primas, la defensa de la biodiversidad, el patrimonio genético y la sabiduría tradicional, la garantía estatal de acceso a alimentos sanos y nutritivos, y el rechazo a la producción y comercialización de organismos genéticamente modificados, como elementos interrelacionados con la seguridad y la soberanía alimentaria.

El tercer y quinto punto proponen mecanismos de protección a la producción agrícola nacional como alternativa a los acuerdos de libre comercio: integración económica basada en la solidaridad y respeto a los derechos de los nacionales, consulta previa para los acuerdos internacionales que involucren al sector rural, la tierra o el agua; no pago de la deuda externa y condonación de deudas a campesinos y productores rurales, así como un aumento de los créditos para estos sectores; restablecimiento de precios rentables de sustentación y subsidios priorizados para la comercialización, desmonte de impuestos a la producción agraria, insumos y servicios públicos; seguros de cosecha; financiación del Estado para los planes de vida o planes alternativos de desarrollo de las comunidades, para la producción y aprovechamiento de tecnologías propias, así como para el control estricto a las tecnologías introducidas; reconstrucción del sector público agropecuario; autogestión de las comunidades en las diferentes cadenas productivas y fomento de formas alternativas de comercio justo.

En cuarto lugar, la histórica demanda de acceso a la tierra se ve reforzada por varios elementos novedosos como el respeto a las formas de territorialidad indígena y campesina, y la protección de la propiedad frente a las amenazas de la violencia. El derecho a la territorialidad, con el reconocimiento de sus diferencias culturales, aparece también en el punto once (Valencia, 2010).

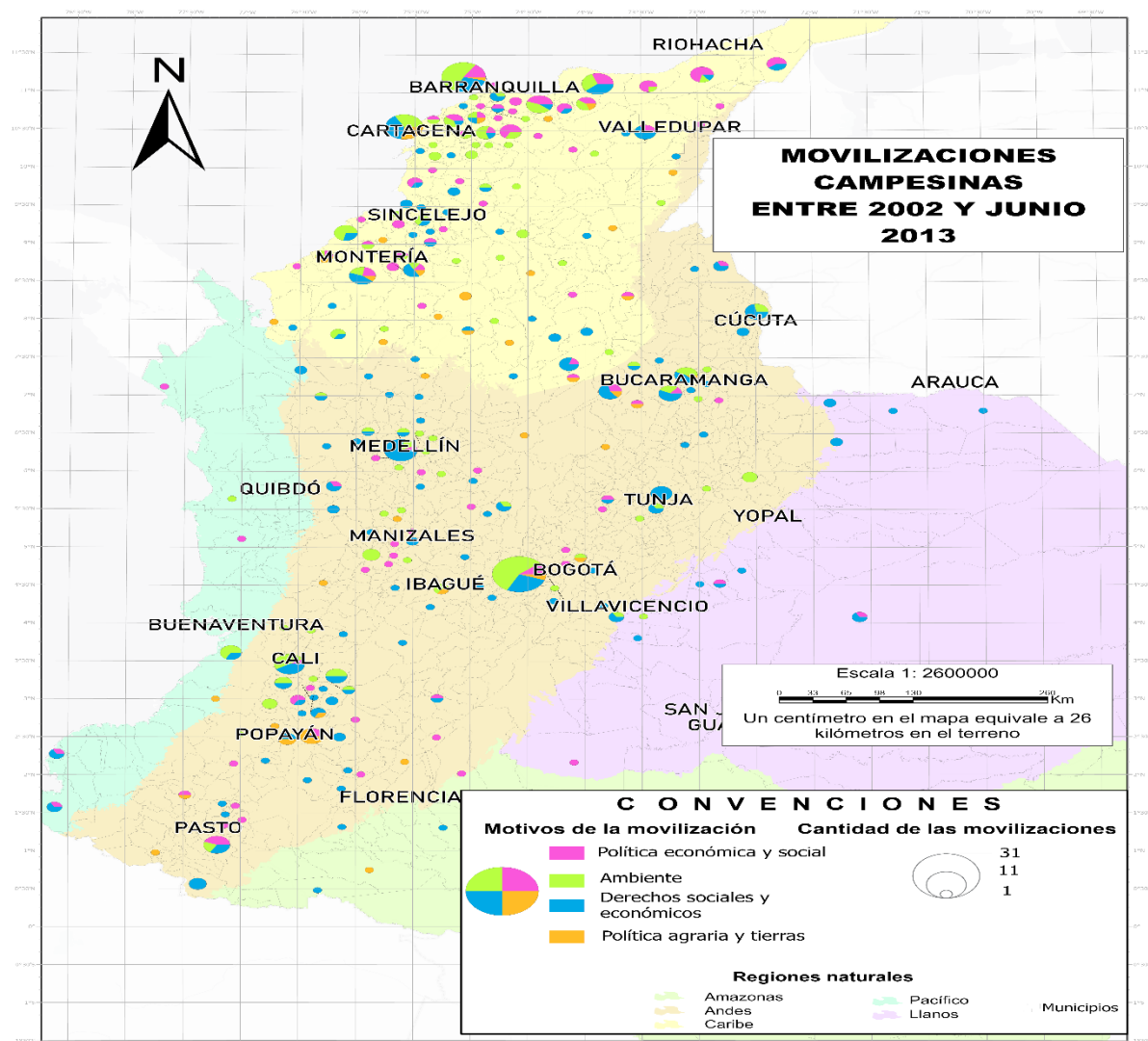


Figura 3. Movilizaciones campesinas entre 2002 y junio del 2013. Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la base de datos de luchas sociales del CINEP/Programa por la Paz.

Las preocupaciones ambientales, aunque transversales a todo el mandato, tienen un lugar propio en el que se propone una política de sostenibilidad de la agricultura a través de la protección de los agroecosistemas, del agua y del suelo, de la promoción del conocimiento tradicional y las tecnologías limpias, de la conservación de bosques y cuencas, de la exigencia de licencias ambientales para todo proyecto de inversión que los involucre.

Estos puntos se complementan con una política de sustitución concertada con cultivadores de coca, marihuana (*Cannabis sativa*) y amapola (*Papaver rhoeas*); la garantía sobre derechos sociales, económicos y culturales de campesinos, indígenas y afrodescendientes; el reconocimiento político del campesinado y especialmente del rol de la mujer rural;

finalmente se hace un llamado a la solución política del conflicto armado y a la unidad los diferentes sectores sociales para llevar a cabo el mandato.

Aunque el mandato fue radicado en el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Agricultura ese mismo año, más como un símbolo que con una expectativa política real, su texto tomó forma de proyecto de ley en 2007 cuando es presentado en el Congreso de la República como una propuesta alterna al Estatuto de Desarrollo Rural que presentó el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe.

No obstante, las organizaciones que hicieron parte del Congreso Nacional Agrario buscaron a nivel de sus bases poner en marcha aquello que estaba a su alcance. Aquí la agroecología toma relevancia, como lo expresa

un dirigente de Fensuagro, “Hemos trabajado en la puesta en marcha de la agricultura limpia, es decir, de la agricultura agroecológica. Nosotros trabajamos en la defensa de los ecosistemas, del medio ambiente y la producción orgánica; también educamos y formamos a las bases campesinas y sus dirigentes para retomar las tradiciones campesinas y recuperar los alimentos limpios” (Valencia, 2010).

Así, en la medida en que el mandato empieza a ser desarrollado de acuerdo a las capacidades de las comunidades, este se convierte no solo en un referente político de la acción organizativa, sino también en una guía que orienta los objetivos de la producción campesina.

Con el apoyo de la cooperación internacional y algunas ONG, el Comité de Interlocución Campesino y Comunal CICC (conformado por 5 plataformas rurales del orden nacional) empieza un proceso de incidencia política en el desarrollo de los debates conducentes a la construcción de la política de seguridad alimentaria y del Plan Maestro de Abastecimiento Alimentario y Seguridad Alimentaria para Bogotá, con el que consiguen incluir allí los conceptos de soberanía alimentaria, economía campesina y mercados campesinos, logrando que en el año 2009, en el contexto de un mandato progresista en la Alcaldía de Bogotá, tales mercados campesinos fueran institucionalizados (Acuerdo 455 de 2010) como un mecanismo para garantizar la soberanía alimentaria de la ciudad y el comercio justo de la producción campesina (ILSA *et al.*, 2010; Oxfam, 2011).

Otras estrategias de circuitos cortos de comercialización surgen paralelamente en otras ciudades del país. Por ejemplo, hacia el año 2003 los mercados ecológicos existentes en 15 municipios del Valle del Cauca se organizan en Cali alrededor de la Red de Mercados Agroecológicos Campesinos del Valle del Cauca. Esta Red, constituida por 68 organizaciones, se ha fortalecido gracias al uso de estrategias campesino a campesino y a partir de su lema de “Aprender haciendo y enseñar mostrando”, sin embargo, padece diversas dificultades asociadas a la carencia de incentivos para la producción, falta de infraestructura que permite que muchos de sus productos sean comprados por mercados orgánicos y revendidos a precios más altos, vías de comunicación deterioradas o inexistentes que aumentan los costos en el producto final, y además, sufren la presión de los monocultivos de caña y las aplicaciones aéreas asociadas a los mismos (Álvarez, 2016).

Además de estos aspectos de la política agraria, el pronunciado ascenso de la protesta social que se observa a partir del año 2006 va a estar relacionado principalmente con las demandas ambientales, de

política económica, social y de derechos económicos y sociales.

Estas demandas van a estar soportadas en conflictos como los efectos laborales y territoriales de la política minero energética del gobierno; las violaciones a la autonomía indígena, su rechazo a la política de Seguridad Democrática y los incumplimientos de este sobre los compromisos acordados con el movimiento indígena; así como la consolidación de lo que podríamos denominar como una resistencia civil al conflicto armado, al desplazamiento forzado y al despojo de tierras en algunas regiones del país.

Como antesala de lo que sería el paro agrario de 2013, desde el año 2008 se intensifican en todo el país las marchas de mineros artesanales que ven la posibilidad de prohibición de su actividad de sustento. Estas protestas van a ser notorias en los municipios de las regiones de la Cuenca Alta del Río Cauca y del Sur de Bolívar. En ambas movilizaciones la respuesta fue la represión oficial.

Precisamente en esta última región se realizó en 2007 un foro regional por “La vida digna y la defensa de los recursos naturales” que reunió a medio millar de campesinos de 52 veredas del nordeste antioqueño, el sur de Bolívar y el Valle del río Cimitarra. Allí se denunciaron, además de atropellos contra los mineros artesanales, las constantes acciones de paramilitares, el asesinato de campesinos presentados por los militares como guerrilleros muertos en combate y el desplazamiento masivo de más de 400 personas en el último año.

En medio de este clima de violencia y estigmatización se consolidan las luchas por el medio ambiente. Aunque estas reivindicaciones ambientales se hacen visibles en las ciudades principales a lo largo de los años noventa, durante la década siguiente viven una verdadera explosión en el resto de regiones del país envolviendo un amplio repertorio que incluye la oposición al establecimiento de basureros, el vertimiento de aguas residuales, o las diferentes formas de contaminación ambiental. Sin embargo, las movilizaciones más recurrentes desde 2004 van a expresar un rechazo a las fumigaciones aéreas sobre los territorios de Parques Nacionales, el incumplimiento del gobierno sobre sustitución de cultivos de uso ilícito, y la construcción de megaproyectos como el de Hidroituango, el proyecto de ISAGEN de construir un túnel para trasvasar las aguas de río Guarín a la hidroeléctrica La Miel, o la construcción de la represa Urrá II: ¡Se acabó el bocachico!, arregan a ritmo de cumbia cerca de 200 familias de pescadores de la Ciénaga del Bajo Sinú que protestaron en 2008 por los efectos ambientales de esta represa.

No solo generaron movilizaciones las políticas que buscaban beneficiar a los grandes capitales mineros y energéticos, también se movilizaron los trabajadores de la agroindustria. Cerca de 12 mil trabajadores de la industria azucarera, sector beneficiado por la política agraria del gobierno, se movilizaron a finales de 2008 en el Valle del Cauca y el norte del Cauca para exigir mejoras laborales.

Frente a esta agudización de los conflictos territoriales la movilización campesina también recurrió a los mecanismos legales. Las tutelas, las acciones populares y otras formas de participación empiezan a jugar un importante papel de contención de los efectos violentos de este modelo de desarrollo. Por ejemplo, la Ley General Forestal (Ley 1021 de 2006), que introducía la figura jurídica del vuelo forestal o derecho real de superficie, con la que se permitía la propiedad no sobre el inmueble sino sobre las plantaciones realizadas en el mismo, fue declarada inconstitucional en 2008 (Sentencia C-30 de 2008) por atentar contra el Código de Recursos Naturales y por poner en riesgo el carácter inembargable e imprescriptible de los resguardos indígenas y los territorios colectivos de la población negra. En el mismo sentido pueden citarse un gran número sentencias y autos (T 025/04, T 821/07, Autos 092/08 004, 005 y 008/09) que buscaban proteger los derechos de la población víctima del desplazamiento forzado.

Un punto culmen del auge de las luchas sociales va a ser la movilización indígena del año 2008. La minga indígena va a adquirir un carácter nacional para estructurar demandas transversales a las diferentes regiones entre las que estaban el acceso a tierra y la garantía de derechos sociales fundamentales. Especialmente, la minga indígena va a recoger el descontento social generado por el nuevo tratado de libre comercio con Estados Unidos y el rechazo a la política de “seguridad democrática”, incluyendo otras particulares del movimiento indígena como el respeto a la autonomía de sus comunidades (Prensa Rural, 2009).

2013-2018

El período comprendido entre 2013-18 (Figura 4) está marcado por lo que muchos analistas no dudaron en catalogar como la mayor protesta rural de la historia reciente del país (Salcedo *et al.*, 2013). El paro agrario de 2013 permitió la convergencia de un grupo amplio y heterogéneo de organizaciones agrarias y rurales, algunas de las cuales tienen sus antecedentes cercanos en la década de 1990 cuando se configura un repertorio de reivindicaciones sociales, políticas y económicas

que buscan responder a las transformaciones que entonces vive el país.

El pliego de peticiones del paro nacional agrario, que se construyó desde el año 2010 en medio de la adopción de nuevos tratados de libre comercio con Estado Unidos, la Unión Europea y varios países de Asia, incluía una serie de puntos generales dentro de los que se encontraban la demanda de respuestas oficiales a la crisis del sector, acceso a la propiedad de la tierra, reconocimiento a la territorialidad campesina, participación efectiva de los mineros tradicionales en la formulación y desarrollo de la política minera, derechos políticos para la población rural, educación, salud, vivienda, servicios públicos y vías de comunicación; así como una serie de puntos dentro de los que se encuentra la promoción efectiva de un modelo de agricultura agroecológica (Mesa de Interlocución Agraria Nacional, 2013).

Efectivamente, al lado de las reivindicaciones, principalmente económicas, de diferentes sectores sociales de la producción agraria, una gran cantidad de organizaciones campesinas le reclamaron al gobierno la promoción efectiva de la producción agroecológica como parte de una política agraria coherente, construida con la participación directa y decisiva del movimiento agrario (Mesa de Interlocución Agraria Nacional, 2013).

Las movilizaciones campesinas se desarrollaron desde mediados del mes de agosto, especialmente a través de bloqueos de las carreteras principales de 25 departamentos del país. Sin embargo, aspectos como la visibilidad que logró la criminalización del uso de semillas nativas causada por la aplicación de la Resolución 970 de 2010 (Por medio de la cual se establecen los requisitos para la producción, acondicionamiento, importación, exportación, almacenamiento, comercialización y/o uso de semillas para siembra en el país, su control y se dictan otras disposiciones) causaron una inusitada solidaridad de sectores urbanos, especialmente estudiantiles, que apoyaron tales bloqueos desde las principales ciudades del país.

Esto generó una presión que obligó al gobierno a tomar las primeras medidas de respuesta. De manera que hacia los primeros días de septiembre organizaciones campesinas de Boyacá, Cundinamarca y Nariño hicieron público un comunicado con el cual el gobierno se comprometió a no aplicar la resolución 970 del 2010 a las semillas nacionales, y a trabajar en una mesa técnica una nueva propuesta sobre semillas certificadas que no afectara al campesinado (Coscione y García, 2014).

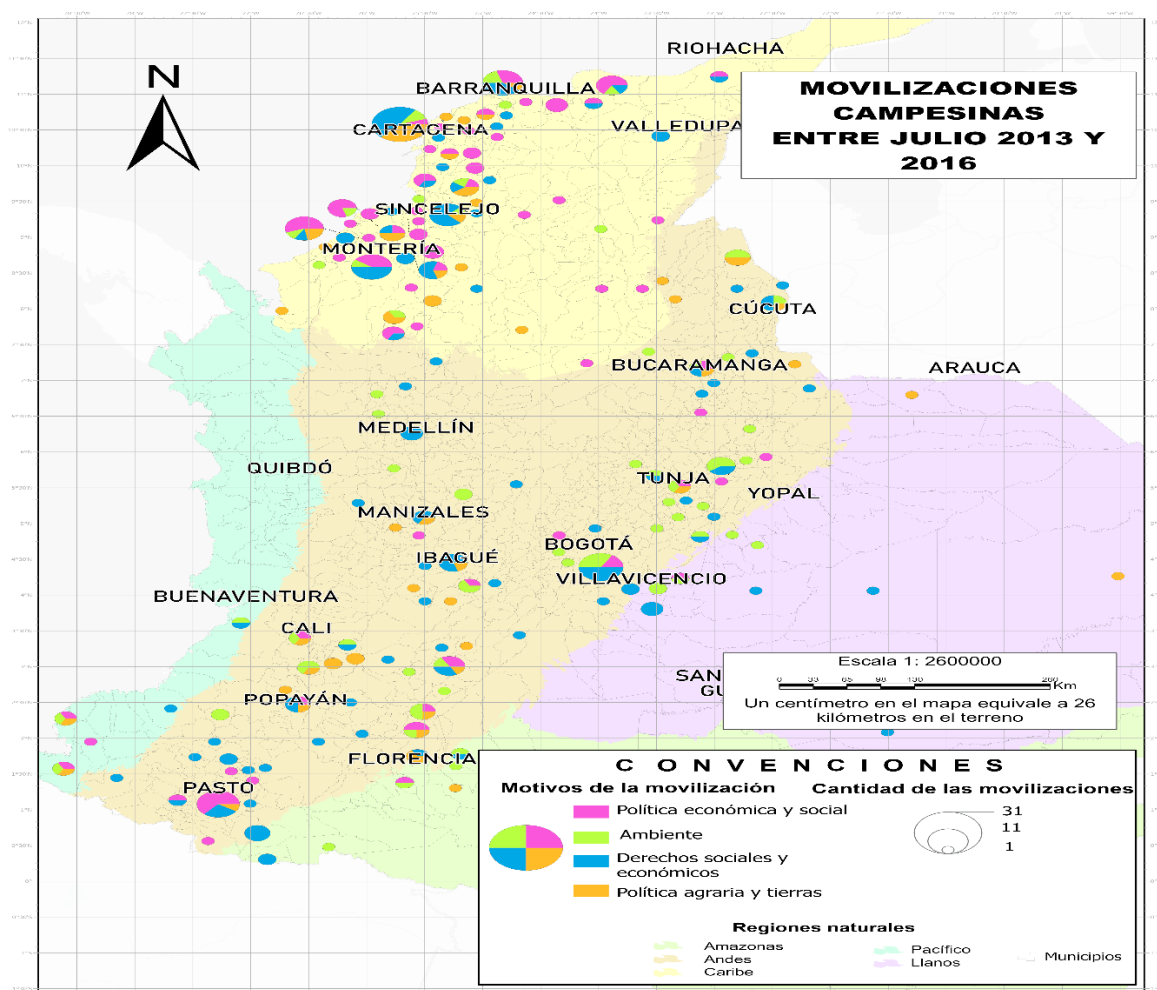


Figura 4. Movilizaciones campesinas entre julio 2013 y 2016. Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la base de datos de luchas sociales del CINEP/Programa por la Paz.

Sin embargo, el carácter estructural de las reivindicaciones del paro contrasta con las medidas adoptadas por el gobierno, las cuales fueron principalmente dilatorias o contingentes. Así, hemos mencionado anteriormente cómo el “Pacto Nacional por el Agro”, que fue presentado por el gobierno como una respuesta a los reclamos campesinos, sirvió sobre todo para avanzar en el proceso de financiación de la política agraria a través de las microfinanzas.

En medio de este avance de los grandes capitales en la extracción de la riqueza de los territorios, que se expresa, por ejemplo, en el proceso de flexibilización de la Unidad Agrícola Familiar (UAF) y la consecuente creación Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES), surgen alternativas agroecológicas como los Huertos Circulares en Bancales de Sabana de la Altillanura Colombiana. Este proceso organizativo se ubica en el suroriente colombiano, principalmente en el

departamento del Meta, adaptándose a las condiciones de las sabanas inundables a través de la formación de bancales circulares, el uso de coberturas, la biodiversidad y el comercio justo, así como la creación de escuelas rurales de capacitación con enfoque agroecológico (Álvarez, 2016).

La agroecología en la agenda de paz

En el desarrollo del proceso de diálogo y negociación que buscaba una solución política al conflicto social y armado de más de 60 años se expresa la relevancia de los problemas rurales y agrarios. Efectivamente, en medio del cumplimiento de un año del establecimiento de las negociaciones entre gobierno y guerrilla de las FARC, y del anuncio por parte de ambos de un primer preacuerdo en el punto inicial relacionada con la reforma agraria, se hace más visible este movimiento múltiple que podríamos denominar “de abajo hacia arriba” en el que se mueve la emergencia de

agroecología en la agenda política colombiana y que nos demuestra que las comunidades rurales son portadoras de transformación del modelo de desarrollo agrario.

En este proceso, la agroecología empieza a ganar terreno en las narrativas de los actores sociales y políticos, de manera que, por ejemplo, de las Mesas Regionales de Paz impulsadas por las Comisiones de Paz del Senado, la Cámara de Representantes y el Sistema de Naciones Unidas en Colombia, para garantizar una mayor participación en los diálogos, surgen aspectos como el reconocimiento del papel ambiental de la producción campesina, su aporte a la seguridad alimentaria, la necesidad de sustituir insumos o la inversión pública en investigación (RENAF, 2016).

El tema también hizo parte de los distintos foros y encuentros realizados en varias regiones del país que buscaban incluir a la ciudadanía en las actividades preparatorias para la discusión del primer punto de la agenda de negociación. Este es el caso del Centro de Pensamiento y Seguimiento a los Diálogos de Paz que surge por mandato de la Mesa de Negociación para el desarrollo de análisis, diagnósticos y propuestas para la agenda de diálogo. Allí aparecen de nuevo múltiples menciones a la agroecología en relación con el equilibrio entre los espacios rurales y urbanos, el ordenamiento social y ambiental del territorio, la estabilización de las comunidades rurales en sus territorios, la recuperación de los agroecosistemas, la creación de territorios libres de cultivos transgénicos, la soberanía alimentaria, la disminución de costos de producción, la mayor utilización de trabajo campesino, la obligación del Estado en la protección del medio ambiente y la posibilidad de que a través de éste la agroecología se convierta en una política agraria de carácter nacional (Vargas Velásquez, 2013).

Aunque finalmente la agroecología se incluye explícitamente en el preámbulo del Acuerdo de Paz solo a través del fortalecimiento y la promoción de la investigación agroecológica, muchas voces señalan la relación entre diferentes puntos del acuerdo y el enfoque agroecológico: el aprovechamiento del conocimiento local en el manejo de la biodiversidad presente en agroecosistemas locales en las regiones en donde se desarrollan Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), la pertinencia de sistemas agroalimentarios multifuncionales dentro del componente productivo de los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, la necesidad de superar los sistemas agropecuarios convencionales en la formulación de los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral, la posibilidad de conservar los servicios ecosistémicos en áreas de importancia ambiental a través del estímulo a las prácticas agroecológicas; y en general, la relación que guarda el

enfoque territorial con la agroecología en el propósito de ayudar a resolver los problemas de pobreza rural, soberanía alimentaria y reconocimiento del campesinado (Ardila, 2015; Picón *et al.*, 2019; Unimédicos, 2017)

Dentro de esta misma clase de procesos, y como resultado del trabajo conjunto de muchas organizaciones sociales y campesinas a nivel internacional, así como de gobiernos y ONG, en el año 2011 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU, Resolución 66/222) proclamó el año 2014 como el Año Internacional de la Agricultura Familiar (AIAF).

A partir de este momento se crearon en diferentes lugares del mundo comités de impulso que buscaban visibilizar la agricultura familiar, y hacer un llamado para que hubiese políticas públicas diferenciadas y específicas para la agricultura familiar (RENAF, 2016). Este papel de la ONU hizo que el gobierno colombiano se interesara en la preparación del AIAF y tanto el MADR, como la FAO y el IICA entraran a participar de este Comité inicialmente formado por algunas organizaciones sociales y universidades. Al finalizar el año 2014, la Campaña del AIAF en el país da como fruto la conformación de una Mesa Técnica para la Agricultura Familiar y un Programa Nacional de Agricultura Familiar (PNAF. Resolución 267 de 2014) (RENAF, 2017).

Solo a comienzo de 2017, luego de la presión de las organizaciones sociales en diferentes espacios académicos y políticos se hace efectiva la propuesta de la Mesa Técnica para la Agricultura Familiar en donde se discute inicialmente la necesidad de derogar la Resolución 267 para dar paso a una Ley para la Agricultura Familiar que fuera participativa. A partir de allí se realizaron más de 18 sesiones de trabajo, un taller nacional y seis encuentros territoriales (Santa Marta, Popayán, Villavicencio, Neiva, Quibdó y Cúcuta) con la participación de más de 350 personas de gobiernos locales, organizaciones sociales campesinas, indígenas y afrodescendientes, academia, cooperación internacional, ONG, y gremios agropecuarios (RENAF, 2017).

Teniendo esta base como insumo, el principal producto de la Mesa Técnica va a ser la creación de unos lineamientos estratégicos de política pública para la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria, que se concretan luego en la Resolución Ministerial 464/2017 del MADR.

La resolución comprende 10 ejes, extensión rural y fortalecimiento de capacidades, bienes públicos rurales, acceso y tenencia de la tierra, incentivos y financiamiento, sistemas productivos sostenibles, circuitos cortos de comercialización, mercadeo social,

diversificación no agropecuaria, incidencia y participación, y sistemas de información, así como unos lineamientos que integran estrategias y acciones concretas para “planificar y gestionar la acción integral del Estado, y orientar la institucionalidad social o privada, dirigida al fortalecimiento de las capacidades sociales, económicas y políticas de las familias, comunidades y organizaciones de Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria, sobre la base de un desarrollo rural con enfoque territorial que mejore la sostenibilidad de la producción agropecuaria y que genere bienestar y buen vivir a la población rural” (MADR, 2017).

Este breve recorrido histórico nos muestra que, a pesar de su aparente fragmentación y heterogeneidad, la paulatina ampliación de las reivindicaciones campesinas que se evidencia a lo largo del periodo 1990-2018 representa un horizonte prometedor para el escalamiento de la agroecología en razón a los siguientes hallazgos.

Las reivindicaciones relacionadas con la agroecología no solo se encuentran inmersas en demandas amplias y sistemáticas que realiza el movimiento campesino, indígena y afrodescendiente, sino que tales reivindicaciones se interceptan con otras demandas y sectores sociales en donde las propuestas de la agroecología pueden tener resonancia. De esta manera queda en evidencia que, “(...) la lucha agroecológica no es únicamente una cuestión agraria o una cuestión alimentaria. Para que gane efectividad como movimiento social transformador, la agroecología tiene el desafío de movilizar segmentos crecientes de la sociedad que se acercan a las ideas y experiencias agroecológicas a través de su involucramiento en las luchas por la justicia social y ambiental, por la integridad ecológica de los ecosistemas, por la salud colectiva, por la soberanía y la seguridad alimentaria y nutricional, por la economía solidaria, por la igualdad entre hombres y mujeres, contra el racismo y la LGBT+fobia y por relaciones más equilibradas entre el mundo rural y las ciudades” (Petersen, 2020).

La lucha por los derechos económicos, sociales y políticos se relaciona con este proceso amplio de transición hacia la agroecología en la medida en que la permanencia de las brechas sociales se asocia a su vez con fuertes obstáculos políticos, institucionales y culturales propios del actual sistema agroalimentario. Tal como lo argumenta Paulo Petersen, estos mismos obstáculos explican por qué la agroecología permanece confinada a nichos de innovación social sin amenazar las bases institucionales que sustentan al actual sistema agroalimentario corporativo, aun cuando esta ha demostrado ser portadora de respuestas a la crisis global socio ecológica (Petersen, 2020).

En esta transición a la agroecología los movimientos no necesariamente rompen radicalmente con el marco de legalidad, el economicismo o el etnocentrismo del discurso de desarrollo agrario convencional, ni consideran al Estado como un actor esencialmente antagónico, pues muchas de sus necesidades y propuestas requieren de una institucionalidad pública para remover los históricos obstáculos que impiden que las propuestas agroecológicas surjan o se fortalezcan en los diferentes territorios. Tal como lo argumenta Parmentier (2014), el papel del Estado en la transición hacia la agroecología debe orientarse primordialmente al cierre de las brechas sociales, económicas, políticas o de género (Parmentier, 2014).

De esta manera, como se ha evidenciado en este recuento histórico, las propuestas de política pública para la agroecología que se encuentran en las demandas de los movimientos sociales, se construyen en escenarios de incidencia y participación mediante diferentes formas de protesta social. Dado el contexto de profunda injusticia e inequidad que predomina en los países latinoamericanos, las demandas por la agroecología toman el carácter de reivindicaciones que se hacen socialmente visibles y se insertan en la agenda pública a través de paros, tomas, invasiones, movilizaciones, desobediencia civil, huelgas, y distintas formas de resistencia

Dentro de tales espacios de incidencia se encuentra, por ejemplo, el proceso social que prosigue a la expedición de la resolución ministerial 464 de 2017. De los 19 lineamientos de esta resolución, seis establecieron una relación directa con la agroecología, y para reafirmar estas profundas interconexiones, de manera que la Mesa Técnica para la Agricultura Familiar reclamó la adopción por parte del Estado de una política pública para la agroecología construida de forma participativa. Esta propuesta se ve complementada posteriormente con el interés de la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ) por los Sistemas Participativos de Garantía (SPG), lo cual alentó el compromiso del MADR de apoyar la realización de 13 talleres regionales y un taller nacional para la construcción participativa de una política pública para la agroecología en Colombia.

Sin embargo, se produce entonces el cambio de gobierno del año 2018 y las organizaciones sociales, Universidades y entidades territoriales con el apoyo de la cooperación internacional deben asumir enteramente este impulso que se concreta en la organización y realización de ocho talleres regionales (Boyacá, Sucre, Bogotá, Risaralda, Caldas, Meta, Valle del Cauca y Caquetá), en los que participan más de 100 representantes de diferentes organizaciones campesinas interesadas en la agroecología.

Gracias a este mismo impulso, a mediados de 2019 se realizó en la Universidad Nacional, Sede Bogotá, el Seminario Internacional de Políticas Públicas para la Agroecología y Taller Nacional de Organizaciones sociales. Fruto de este nutritivo proceso surgen las propuestas que se pueden agrupar en las mismas categorías que conforman las demandas campesinas en el periodo 1990-2016. Estas propuestas se detallan en las siguientes estrategias que los movimientos sociales han venido concretando a través de acciones de incidencia política a nivel municipal, departamental y nacional.

El acceso a medios de producción, especialmente de tierra y capital, ocupa un lugar prioritario dentro de las propuestas. Para garantizar el acceso a la tierra para los productores agroecológicos, se propone la simplificación del proceso de titulación de baldíos y de formalización de la propiedad para productores en proceso de reconversión, de la adjudicación de tierras de extinción de dominio con acompañamiento técnico para la reconversión agroecológica y de articular los diferentes programas y proyectos de acceso a la tierra para la mujer rural.

Frente al acceso al crédito para la agroecología, las propuestas se centran en el fortalecimiento de los mecanismos de la economía solidaria. Además de evitar la dependencia del sistema financiero se pone de manifiesto la necesidad de que los proyectos que implican una reconversión agroecológica tengan un especial tratamiento dentro de la política pública, facilitando el establecimiento de herramientas financieras que permitan la estabilidad del ingreso económico de las familias campesinas, por lo menos mientras se logra una integración a formas alternativas de mercado o a mecanismos de compras públicas.

La protección de semillas nativas ocupa un lugar central dentro de la producción agroecológica, por esto, diferentes actores coinciden en encargar a las entidades nacionales y sub nacionales de la creación de mecanismos institucionales y legales de carácter participativo para la protección de las semillas nativas, así como la creación y/o fortalecimiento técnico-científico, especialmente en aspectos fitosanitarios, de “bancos” locales de semillas nativas. Al mismo tiempo se deben planear e implementar mecanismos para la preservación de la cultura asociada al uso de las semillas nativas en cada una de las regiones del país.

Dentro de la propuesta de fomento de alternativas de comercialización se reclama que las entidades nacionales y sub nacionales converjan con las organizaciones de productores agroecológicos locales para la construcción participativa de mercados justos y solidarios. Además de institucionalizar espacios para el trueque entre productores y consumidores, este proceso de construcción participativa debe fomentar la

creación de circuitos cortos de comercialización, las marcas propias locales, los sellos de confianza, los sellos de cero kilómetros, entre otros, así como incentivar estrategias para las compras públicas locales.

También ocupa un lugar importante la formación de consumidores conscientes y fortalecimiento de organizaciones de consumidores por su papel en la incidencia política para el desarrollo de procesos de regulación de la producción o el etiquetado de productos con modificaciones genéticas; este tipo de organizaciones debe fortalecerse de acuerdo a la ley (Decreto 1441 de 1982).

De la mano de este fortalecimiento debe darse también un fomento a los Sistemas Participativos de Garantía (SPG), partiendo de los principios de participación, horizontalidad, solidaridad y respeto por la diversidad económica, ecosistémica, social y cultural de cada región del país.

También debe darse un impulso a diferentes formas de investigación, desarrollo e innovación agroecológica mediante la generación de programas y proyectos, a nivel nacional subnacional y local, que incluyan la participación activa de los saberes campesinos dentro de sus estrategias de creación.

Se propone fomentar la difusión de prácticas agroecológicas a través de emisoras comunitarias y medios locales de comunicación, redes sociales, bibliotecas locales; así como la creación de un sistema de información que identifique los grupos o asociaciones agroecológicas, custodios de semilla, faros agroecológicos o granjas demostrativas que permitan una construcción y difusión local del conocimiento agroecológico.

También dentro de la política agraria debe darse un lugar a la juventud rural y la innovación agroecológica a través de la creación de oportunidades para la permanencia de los jóvenes rurales en todos los territorios rurales. Estas oportunidades se deben materializar en programas que involucren educación, uso de TICs como forma de capturar el interés de los jóvenes por el medio rural al tiempo que se articulan de manera innovadora a la consolidación de propuestas agroecológicas de producción.

Como muestra de un mayor protagonismo de los temas ambientales dentro de la movilización campesina e indígena, los diferentes actores y organizaciones proponen un fortalecimiento y democratización de los mecanismos de política ambiental para el fomento de la producción agroecológica.

Esta propuesta se soporta en la necesidad de que los mecanismos de planificación y regulación ambiental cobijen a la agroecología como una alternativa

económicamente viable, socialmente justa y ambientalmente sostenible. De esta manera se vincula al Ministerio del Medio Ambiente, al Ministerio de Agricultura y a todas las entidades descentralizadas en el fortalecimiento de los mecanismos de planificación ambiental a través de la inclusión de la agroecología como un lineamiento en la prospectiva de la guía técnica para la elaboración de los Planes de Manejo y Ordenamiento de Cuenca (POMCA); lo mismo que la creación de incentivos dentro de los mecanismos de planificación de las zonas de conservación y ecosistemas estratégicos, y en las zonas de regeneración y restauración ambiental para que la producción agroecológica cumpla un papel central.

También se propone fortalecer, dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, la categoría de agroecosistemas estratégicos para que se permita adoptar allí instrumentos de gestión para la conservación de los agroecosistemas y sus servicios ambientales, la permanencia de la población rural en el territorio, así como la conservación de saberes y prácticas agroecológicas.

Las organizaciones sociales proponen de manera clara que la agroecología debe ser considerada como una estrategia fundamental para la adaptación al cambio climático. En este sentido se propone la inclusión de las prácticas agroecológicas como un componente central en los programas y proyectos para la conservación de fuentes hídricas, cuencas, caudales y desembocaduras; que se estimule la utilización de especies criollas y nativas más resistentes al cambio climático; y se fortalece la realización de planes de gestión del riesgo que tengan en cuenta a la agricultura como un elemento importante de los problemas ambientales, así como de las correspondientes soluciones.

Dentro de este campo de las reformas institucionales que viabilicen a la agroecología como una herramienta de sostenibilidad ambiental se propone también que los saberes tradicionales, locales y vernáculos relacionados con prácticas agroecológicas se incluyan dentro de la Política de Conocimiento Tradicional del Ministerio del Interior y del Ministerio de Cultura.

También se propone el fortalecimiento de acueductos comunitarios, la promoción de energías alternativas y la promoción de la Educación Ambiental a través de los Planes Decenales de Educación Ambiental, PRAES – PROCEDAs; la creación de programas de formación de técnicos rurales especialistas en educación ambiental que complementan la labor extensionista; así como a la creación de un programa de intercambio internacional que permita a los productores de la agricultura familiar y comunitaria conocer e intercambiar experiencias con otros países tropicales.

Dentro del campo del cumplimiento de derechos económicos y sociales se propone un espectro amplio de transformaciones que parten del diseño y la implementación de un sistema de seguridad social en salud para la población rural de Colombia. Adicionalmente las organizaciones proponen que las autoridades nacionales o subnacionales atiendan la economía del cuidado a través de mecanismos adaptados a los contextos culturales, económicos y sociales de cada región.

Para esto tendrán en cuenta estrategias para la protección de la niñez, la vejez y la salud de la población rural de menores ingresos, tales como el fortalecimiento de redes de apoyo, exenciones fiscales, educación gratuita técnica y/o profesional para las labores del cuidado, priorización en el acceso a infraestructura, privada o comunitaria relacionada con las labores de cuidado, acueducto, alcantarillado, vivienda o centros especiales para el cuidado, entre otros.

Teniendo en cuenta las características sociales del medio rural, las oportunidades diferenciadas para mujeres y jóvenes, también se encuadran en un reconocimiento de la economía del cuidado, al tiempo que promueven la inclusión y la igualdad. Dentro de estas ocupa un lugar especial el diseño y ejecución de programas de vivienda rural adaptadas a la cultura y el entorno natural que tenga en cuenta los usos, costumbres, tradiciones y necesidades locales.

También proponen una política nacional de prevención y salud basada en la alimentación que contenga estrategias conducentes a investigar, reconocer, salvaguardar y divulgar saberes agroecológicos y de la medicina popular en las diferentes regiones del país.

En el campo de las transformaciones necesarias para fomentar la agroecología también es fundamental la creación de estrategias que permitan el diálogo intergeneracional entre ancianos y jóvenes, permitiendo asegurar que tanto los conocimientos agroecológicos como de adaptación al entorno natural, sigan haciendo parte de las estrategias productivas. Se propone el emprendimiento de acciones, iniciativas, espacios, fechas especiales, conmemoraciones, encuentros, prácticas o estrategias de comunicación que permitan valorizar el conocimiento local, tradicional y propio en la estructuración de formas productivas adaptadas.

Existe un consenso en resaltar el papel central de la educación en la transición agroecológica, incluyéndola como una parte del pensum de las instituciones educativas de educación básica, secundaria, técnica y universitaria. Para los procesos de formación juega un papel importante la generación de redes

agroecológicas, los medios locales de comunicación, la promoción de Escuelas Agroecológicas Rurales “ECAS”, las granjas educativas o las parcelas demostrativas que permitan una integración o sinergia con entidades académicas y organizaciones agroecológicas mediante la formación a extensionistas agroecológicos. La participación de campesinos con conocimientos tradicionales o saberes que puedan transmitir y replicar la información en otros sitios, constituye una estrategia educativa por excelencia para la difusión de la agroecología.

En el campo de política Económica y Social, juegan un papel fundamental los mecanismos de planificación territorial para la agroecología. Lo cual implica poner la economía local y nacional al servicio de un objetivo central: la permanencia de las familias campesinas en los diferentes territorios en condiciones de bienestar.

La estrategia de promoción de las economías locales para la permanencia en el territorio propone en primer lugar la promoción de la agroecología a través de los mecanismos locales de planificación. De manera que Alcaldías y gobernaciones se vean involucradas en las tareas de poner en funcionamiento y/o fortalecer los espacios de participación local y regional establecidos en la ley, entre ellos los Consejos Municipales de Desarrollo Rural, los Consejos Seccionales de Desarrollo Agropecuario para que a través de ellos las comunidades incidan en la inclusión de la agroecología en los Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria, en los capítulos agropecuarios de los POT, lo mismo que en la facultad que tienen estos para la delimitación de los ecosistemas estratégicos.

Adicionalmente, el fortalecimiento de las economías locales pasa por una promoción activa, permanente y estable del cooperativismo y la economía solidaria a través de la formación en economía solidaria impartida tanto para la educación secundaria como para las asociaciones de productores; el Impulso local para el establecimiento de fondos mutuales y otras organizaciones de economía solidaria; la creación de estrategias alternativas de financiación (fondos rotatorios, capital semilla, créditos) con enfoque de economía solidaria; el reconocimiento, valoración y promoción de las prácticas cotidianas de solidaridad y ayuda mutua existente en las diferentes regiones, creando, por ejemplo, estrategias para el trueque de alimentos o de insumos agroecológicos, el fomento a emprendimientos rurales más allá de lo agrícola: servicios, turismo, transformación, mercadeo, etc.

Aunque es claro que en este proceso de escalamiento y masificación de la agroecología el protagonismo lo tienen los movimientos campesinos, tales movimientos reclaman acciones de transformación institucional, en la que se dé un lugar a una nueva política fiscal a través, por ejemplo, de la creación de

una tasa diferencial del impuesto predial para los productores agroecológicos, lo mismo que para trabajadores y trabajadoras de la economía del cuidado.

También se propone la creación de un Sistema Nacional de Fomento a la Agroecología, que tiene como objetivo coordinar a los diferentes actores e instituciones relacionados con la formulación e implementación de la política pública para la agroecología, ser veedor del cumplimiento de sus funciones; promover y verificar la participación campesina, indígena y afro en las instancias locales y nacionales de formulación e implementación de políticas públicas relacionadas con la agroecología.

Para esta transformación institucional también es importante orientar la cualificación de las instituciones cuyas actividades se desarrollan en la ruralidad y que afectan las prácticas agroecológicas. Para lo cual es indispensable formar y capacitar a los funcionarios del nivel local y nacional en los principios de la agroecología. Mientras simultáneamente se refuerza la autonomía campesina, indígena y afro a través de, por ejemplo, el reconocimiento a la capacidad de estos para las declaratorias de territorios y zonas libres de transgénicos.

CONCLUSIONES

Como ha ocurrido en otros países de América Latina, los repertorios campesinos en el país apuntan a rescatar, validar y fortalecer las prácticas consuetudinarias de carácter agroecológico como una herramienta política de defensa, reconfiguración y transformación de los espacios rurales en medio de las disputas territoriales que se dan entre los intereses de los grandes capitales y los pobladores rurales por la gestión autónoma de los territorios y los recursos. Estas disputas adquieren la forma de diferentes luchas discursivas y territoriales en las que la agroecología cumple un papel de soporte. En el nivel territorial, las diferentes expresiones de la movilización social, las experiencias educativas agroecológicas, las estrategias para garantizar la soberanía alimentaria, la autonomía económica, o la gestión participativa de lo público, son solo algunas de las formas que adquieren estas luchas por la agroecología. Mientras que en el nivel discursivo, esta movilización social de oposición a las diferentes manifestaciones del modelo de desarrollo agrario que se impone en el país desde comienzos de los años noventa, se acompaña de propuestas en las que la agroecología aparece como un referente claro de los principios, valores y mecanismos de política pública que se enuncian en los escenarios de incidencia política a nivel local y nacional.

La enunciación de tales narrativas que visibilizan a la agroecología como un referente dentro de los espacios

de incidencia política tiene una gran importancia pues, más allá de las victorias inmediatas del movimiento social, se avanza paulatinamente en la naturalización del lenguaje de la justicia y la sostenibilidad cuando se logra el debate, la interacción y eventualmente la confluencia de múltiples actores con posiciones complementarias, diferentes o muchas veces opuestas.

De esta manera, primero como una serie de prácticas, y luego como un reclamo para que dichas prácticas puedan desarrollarse de manera autónoma y pacífica, la agroecología gana terreno en los discursos públicos de diferentes actores, trascendiendo así el espacio limitado de la parcela para escalar hacia el campo amplio de las narrativas que la sociedad construye para transformarse. Este proceso, sin embargo, no está exento de enormes complejidades, pues en la actualidad existe un diálogo entre diferentes narrativas que buscan dotar de significado a la agroecología, de manera que las tensiones o disputas entre éstas se deberían definir en la arena política a partir del proceso de diálogo y coproducción científico-campesino.

Este análisis del movimiento campesino colombiano debe ser el referente fundamental en la construcción de políticas públicas para la agroecología. Valorar el conocimiento local y tradicional implica entender la actuación de las comunidades y movimientos campesinos como constructores de propuestas alternativas frente a la crisis social, económica y ambiental provocada por las reformas neoliberales al interior de las sociedades rurales. Esta condición, tiene especial significancia en Colombia, en el período pos-acuerdo de Paz, en el que las reformas rurales necesarias se deben anclar en un pensamiento y acción distintos a los que han estado en la causa estructural del conflicto de más de medio siglo. De esta forma el escalamiento de la Agroecología en Colombia, a diferencia de cualquier otro país de la región, se da en medio de un proceso de reconfiguración de lo rural, en el que la Agroecología puede jugar un papel transformador de las condiciones de vida de la población rural y la sociedad en su conjunto.

Funding. This work was partially funded by the Bilateral Program to Support Doctoral Training in Peacebuilding, Environment and Development in Colombia. ZEF (University of Bonn) – IDEA (National University of Colombia).

Declaration of conflict of interest. The authors of this work declare that they have no conflict of interest with the institution or any person related to the proposed manuscript.

Compliance with ethical standards. Due to its nature, this study does not require the approval of a bioethics committee.

Statement of data availability. Spatial data related to peasant mobilization in the period studied is freely available at <http://datos.idea-zef.unal.edu.co/>

Author Contribution Statement (CRediT). **J.A. Vivas-García** – Conceptualization, formal analysis, research, original writing-draft. **Á. Acevedo-Osorio** – Research, supervision, writing, review and editing.

REFERENCIAS

- Acevedo - Osorio, Á. and Chohan, J., 2020. Agroecology as social movement and practice in Cabrera's peasant reserve zone, Colombia. *Agroecology and Sustainable Food Systems*, 44(3), pp. 331-351. <http://doi.org/10.1080/21683565.2019.1623359>
- Alvarez, P., 2016. *Procesos de Incidencia en Desarrollo Rural con enfoque agroecológico*, Pasto, Colombia: Instituto Mayo Campesino, Red Colombiana de Agricultura Biológica,
- Archila, M., 2003. *Idas y venidas, vueltas y revueltas: protestas sociales en Colombia 1958-1990*. Bogotá: ICAHN, CINEP.
- Ardila, C., 2015. Agroecología: Una herramienta para construir paz. Las2orillas. <https://www.las2orillas.co/agroecologia-una-herramienta-para-construir-paz/> (accessed 11.11.20).
- Bautista, S.C., 2012. Alternativas analíticas en el campo de la movilización social en Colombia: la acción colectiva de alto riesgo. Lecturas a propósito de la protesta campesina en el Tolima. *Estudios Políticos*, (41), pp. 57–79.
- CNMH, 2014. *Pueblos Arrasados: memorias del desplazamiento forzado en El Castillo.*, Bogotá: CNMH.
- CNRR, 2009. *El Despojo de Tierras y Territorios. Aproximación conceptual. Área de Memoria Histórica - Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR)*, Bogotá: Instituto de Estudios Políticos y Relaciones.
- Congreso de los Pueblos, 2015. Comunidades construyendo alternativas Resistencias al modelo minero energético de las multinacionales y el PND Comisión de Comunicaciones Vida Digna | N°2. Congr. Los Pueblos. <https://congresodelospueblos.org/minero-energetico/> (accessed 11.11.20)
- Coscione, M. and García, V., 2014. TLCs, paro nacional agrario y movimiento social en Colombia.

- Mundo* Nuevo, <https://journals.openedition.org/nuevomundo/67127> (accessed 11.11.20).
- Fajardo, D., 2012. Colombia: dos décadas en los movimientos agrarios. *Cahiers des Amériques latines*, 71, pp. 145-168
- Giraldo, O., y McCune, N., 2019. ¿Puede el estado llevar la agroecología a escala? Experiencias de políticas públicas en territorialización agroecológica desde América Latina. *Cuaderno de trabajo No. 2*. <https://www.ecosur.mx/masificacion-agroecologia/cuaderno-de-trabajo-no-2-puede-el-estado-llevar-la-agroecologia-a-escala-experiencias-de-politicas-publicas-para-la-territorializacion-agroecologica-en-america-latina/> (accessed 11.11.20)
- González de Molina, M. and Sevilla Guzmán, E., 1993. *Ecología, Campesinado e historia. Para una reinterpretación del desarrollo del capitalismo en la agricultura*, Madrid, España: Editorial Piqueta.
- ILSA, OXFAM, CICC, 2010. *Mercados Campesinos: Hacia una política pública de apoyo a la economía campesina*. Bogotá. https://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/sites/default/files/files_articulos/mercadoscampesinos.pdf (accessed 11.11.20)
- Instituto Latinoamericano para una Sociedad y derecho Alternativo y Oxfam, 2011. *Mercados Campesinos. Resultados, lecciones aprendidas y desafíos, 2007-2010*. Bogotá: Gente Nueva.
- León, T., De prager Sanchez, M. and Acevedo Osorio, A., 2017. Toward a history of agroecology in Colombia. *Agroecology and Sustainable Food System*, 41 (3-4), pp. 296-310. <http://doi.org/10.1080/21683565.2017>.
- MADR, 2017. RESOLUCIÓN 464 DE 2017 “Por la cual se adoptan los lineamientos estratégicos de política pública para la agricultura campesina, familiar y comunitaria y se dictan otras disposiciones”. Bogotá. <https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Resoluciones/Resoluci%C3%B3n%20No%20000464%20de%202017.pdf> (accessed 11.11.20)
- Mesa de Interlocución Agraria Nacional, MIA, 2013. Pliego de peticiones al gobierno Nacional <http://www.ips.org/blog/cvieira/2013/08/29/este-es-el-pliego-de-peticiones-del-paro-nacional-agrario/> (accessed 11.11.20)
- Ortiz Guerrero, C.E., Pérez Martínez, M.E., Castillo Brieve, D. and Muñoz Wilches, L.A., 2004. Zonas de Reserva Campesina. Aprendizaje e Innovación para el Desarrollo Rural. Universidad Javeriana, Bogotá.
- Parmentier, S., 2014. *Scaling-up agroecological approaches: what, why and how?* Bélgica: OXFAM Solidarity.
- Picón, W.M.S., Bonilla, E.B.V. and Prada, A., 2019. Agroecología: Una plataforma para la Paz. *Reflexión Política* (21), pp. 75-88. <https://revistas.unab.edu.co/index.php/reflexion/articloe/view/3634> (accessed 11.11.20).
- Prensa Rural, 2013. Zonas de Reserva Campesina: primera escuela agroecológica <https://prensarural.org/spip/spip.php?article12776> (accessed 11.11.20)
- Prensa Rural, 2009. La minga indígena: los caminantes de Colombia, en busca de la nómada justicia <https://www.prensarural.org/spip/spip.php?article2078> (accessed 7.12.20).
- RECAR, 2007. Pueblo Zenú, recuperador de Sueños. Córdoba y Sucre, *Revista Semillas* 32-33 <https://www.semillas.org.co/es/pueblo-zen-recuperador-de-sueos-resguardo-indigena-zen-de-san-andrs-de-sotavento-crdoba-y-sucre> (accessed 11.11.20)
- Red Nacional de Agricultura Familiar., 2017. Mesa Técnica de Agricultura Familiar y Economía Campesina. Agricultura Familiar Colombia, <https://agriculturafamiliar.co/mesa-tecnica/> (accessed 3.12.20).
- Renaf, 2016. AIAF+10. Agricultura Familiar Colombia <https://agriculturafamiliar.co/mesa-tecnica/> (accessed 3.12.20).
- Rincón García, J.J., 2001. Problemática Campesina: una mirada al Movimiento Campesino en los Noventa. *Revista Colombiana de Sociología*, 6 pp. 87-108.
- Salcedo, L., Pinzón, R. and Duarte, Carlos., 2013. El Paro Nacional Agrario: Un Análisis de los Actores Agrarios y los Procesos Organizativos del Campesinado Colombiano. Corporación para la Educación e Investigación Popular <https://cedins.org/index.php/2013/10/02/el-paro-agrario-analisis-de-los-actores-agrarios-y-los-procesos-organizativos-del-campesinado/> (accessed 11.11.20)
- Sevilla Guzmán, E. and Mielgo, A., 1994. Para una teoría etnoecológica centroperiferia desde la Agroecología, Prácticas Ecológicas para una Agricultura de Calidad. I Congreso de la Sociedad

Española de Agricultura Ecológica, Toledo (España), pp. 448–460.

Toledo, V.M. and González de Molina, M., 2007. El metabolismo social las relaciones entre la sociedad y la naturaleza, En: El paradigma ecológico en las ciencias sociales. Icaria Editorial, pp. 85–112.

Unimedios, 2017. Agroecología contribuiría a una paz estable y duradera. <http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/agroecologia-contribuiria-a-una-paz-estable-y-duradera> (accessed 11.11.20).

Valencia, R., 2010. El Mandato Agrario vive, 2002-2010. *Cuadernos de Tierra y Justicia, Serie 2, No. 11*. Bogota.: Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativo,

Vargas Velásquez, A., 2013. *Diálogos de la Habana: Miradas múltiples desde la Universidad*. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

Wezel, A., Bellon, T., Doré, C., Francis, D. and Vallod, C., 2009. Agroecology as a Science, a Movement and Practice. A Review. *Agronomy for Sustainable Development*. 29 (4) pp. 503-515. <http://doi.org/10.1051/agro/2009004>